

## *Colombia: Una paz esquivada*

*Daniel Pécaut<sup>1</sup>*

**E**n Colombia, el problema de la paz estuvo en el centro del debate presidencial de 1998. Parecían darse entonces todas las condiciones para que un proceso de negociación con la guerrilla pudiera comenzar después de las elecciones. Todos los candidatos se mostraban favorables a ello. Por lo demás la opinión pública no deseaba otra cosa, como se había manifestado ya en varias ocasiones. Las propias organizaciones guerrilleras, también parecían reclamarlo.

Las FARC, la más poderosa de ellas, fueron aún más lejos. Mediante varias señales mostraron que consideraban al conservador Andrés Pastrana como el candidato más adecuado para adelantar las negociaciones. Habría mucho de qué sorprenderse en esa actitud pues sus preferencias siempre se inclinaron hacia el liberalismo y por otra parte Pastrana nunca ocultó su preferencia por las políticas neoliberales. Aún así, al recibir al emisario personal de Andrés Pastrana la propia víspera del escrutinio, al formular públicamente sus dudas acerca de que su rival liberal pudiese interrumpir la dinámica de la guerra, y en fin, al hacer votar por Pastrana en las regiones bajo su control, Las FARC no podían haber enviado un mensaje más claro. Es indudable que ese mensaje influyó en el resultado final.<sup>2</sup> Ante

---

<sup>1</sup> Colombiano francés, sociólogo, Profesor e investigador de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, desde los años sesenta su interés de investigador lo condujo a nuestro país. En español su primer trabajo publicado fue *Política y sindicalismo* en 1973, otras publicaciones suyas como *Orden y Violencia* (1987) abrieron nuevas perspectivas sobre el problema. Con motivo del 133 aniversario de la Universidad Nacional, en reconocimiento a su trayectoria, el profesor Pécaut fue galardonado con el Doctorado Honoris Causa. El presente artículo está tomado de la Revista *Problèmes d'Amérique latine*, N° 34, julio-septiembre de 1999, y la traducción es de Fernando Cubides, profesor de la Universidad Nacional.

<sup>2</sup>No solamente mediante el voto en las zonas bajo su control, sino mediante la inducción de preferencias en los sectores medios de la población.

muchas miradas pudo haber aparecido como que Andrés Pastrana hubiera recibido la propia investidura de Manuel Marulanda, el legendario «Tirofijo» quien desde hace casi medio siglo simboliza la lucha armada. Nadie podía dudar entonces que la búsqueda de la paz sería la prioridad del nuevo presidente.

Aun antes de asumir sus funciones Pastrana lo confirmó de una manera espectacular. Acorde con las exigencias de las FARC ya durante su campaña electoral se comprometió a «desmilitarizar» cinco municipios con el fin de que se llevaran a cabo las negociaciones. Y el 9 de Julio de 1998, le hizo una audaz visita a Marulanda en su fortín del Caguán, algo que ningún presidente había hecho hasta entonces. Se comprometió así a reconocer el estatus político de las guerrillas. Pocos días después el ELN se mostró a su vez deseoso de emprender negociaciones. En el curso de una reunión en Maguncia, Alemania, firmaba con representantes de la «sociedad civil» que había convocado, un acuerdo que sentaba las bases para futuras discusiones, con algunas cláusulas que parecía ir en dirección a una «humanización de la guerra».

El gobierno no podía ignorar que el camino hacia la paz está sembrado de obstáculos. Ni siquiera se consideró la posibilidad de un cese al fuego: tanto el gobierno como la guerrilla estaban convencidos de que los diálogos preliminares podían desarrollarse en medio de la confrontación, la guerrilla repetía que no pensaba deponer las armas aún en caso de que se llegara a un acuerdo. Añadía además de que tal acuerdo no podía consistir en simples medidas que posibilitaran su reconversión o reinserción, sino que habrían de implicar profundas transformaciones de las estructuras políticas y sociales. El gobierno parecía confiar sin embargo en que una vez que se iniciaran el proceso sería posible volver sobre esas pretensiones iniciales. La opinión, por su parte, prestaba su atención ante todo a los gestos espectaculares, y no dudaba que presagiaban una salida positiva a corto o mediano plazo.

Un año después la decepción no puede ser más grande. Si los diálogos preliminares han tenido lugar, las negociaciones propiamente dichas están lejos de iniciarse. Tanto con las FARC como con el ELN los incidentes y malentendidos se ha ido repitiendo. Y en el terreno mismo, la confrontación no ha hecho más que degradarse. Guerrilla y paramilitares se disputan como nunca regiones enteras, y la población civil de esas regiones queda sometida a un fuego cruzado, una cifra conservadora sobre el número de desplazados bordea la cifra de 1'500.000 personas.

Como si esto no bastara, una recesión económica, de una intensidad no vista desde 1930, golpea al país. La tasa de desempleo, se disparó, el valor del salario se

ve seriamente amenazado, y sectores enteros de la economía se han visto afectados. No solo se extiende una ola de pesimismo sobre las posibilidades de desarrollo de Colombia. La propia suerte de las negociaciones se halla en entredicho pues el gobierno se muestra incapaz de poner en funcionamiento los programas sociales que habrían de completar su estrategia de paz y su programa económico hace evidente esa carencia.

No es sorprendente entonces que los niveles de popularidad del presidente hayan descendido bruscamente y sus apoyos en la clase política se hayan reducido en forma notoria. Aun si las negociaciones comenzaran en verdad, el escepticismo se ha generalizado acerca de sus resultados. Si en medio de todo esto la cuestión de la economía de la droga se había relegado de momento a un segundo plano, ha vuelto a aflorar en la superficie. El problema ya no es saber si Colombia logrará la paz a corto plazo sino más bien si el conjunto de fenómenos que desde hace tiempo se engloban en el rótulo de «violencia» no está evolucionando ahora hacia una auténtica guerra civil.

Por cierto la situación colombiana se ha convertido en un tema de preocupación internacional. No pasa un día sin que se haga algún tipo de pronunciamiento al respecto desde los Estados Unidos. En momentos en que deben retirar sus últimas tropas del canal de Panamá, y Hugo Chávez conduce a Venezuela a un proyecto aventurero, el desorden colombiano se transforme en un riesgo para toda la región. Los Estados Unidos han comenzado a incrementar su ayuda militar a Colombia, y todo indica que proyecta aumentarla masivamente. La guerra interna podría mostrar entonces una mayor intensificación.

El presente artículo se ocupa del «proceso de paz». En una primera parte, delinea el contexto en el que se desarrolla, en la segunda describe sus distintas viscosidades, y en la última aborda la especificidad de la confrontación armada. Se alude como parte del contexto a la crisis económica a la internacionalización del problema colombiano.

### *1. El contexto de los diálogos*

#### *Del problema del narcotráfico al de la confrontación armada*

Tanto en Colombia como en el extranjero, la atención de los observadores se dirige hacia la confrontación armada. Sin embargo es menester recordar que durante años las actividades ligadas a las drogas han contribuido de manera más directa a desestabilizar a la sociedad y a las instituciones colombianas que el propio conflicto armado, que en todo caso, visto desde Bogotá, parecía inscribirse dentro de las manifestaciones ya endémicas de la vida social, y hasta cierto punto, hacía parte del paisaje.

Los narcotraficantes se mostraron innovadores al atacar al corazón del estado y de la vida política, El terrorismo desatado por el cartel de Medellín, en especial entre 1987 y 1993, así lo demuestra, tanto como su participación en alianza con otras fuerzas oscuras, en la serie de asesinatos dirigidos contra magistrados y dirigentes políticos y que llegó a diezmar a sectores de la oposición como la Unión Patriótica y las organizaciones sindicales. La crisis de las instituciones, y en especial, la forma en que fue afectada la administración de justicia, es en gran medida el resultado de ese poder de intimidación así como de la incomprensible difusión de la violencia.

El narcotráfico también hace de la corrupción su intermediaria y ha corroído muchos sectores de la administración y sus mecanismos políticos. El financiamiento de la campaña de Ernesto Samper, las numerosas inculpaciones que se dieron a lo largo de su mandato a miembros de la élite política y a varias de las autoridades locales, revelan lo extendido de tales prácticas. Tampoco son ajenas a la dislocación de los partidos políticos, que se han convertido en una simple sumatoria de clientelas políticas locales y circunstanciales.

La economía de la droga ha propiciado un remezón de las estructuras sociales. Sus efectos no produjeron tan solo una bonanza de los sectores inmobiliario y financiero, ha conllevado una auténtica «contrareforma agraria» (por lo menos cuatro millones de hectáreas de las mejores tierras han pasado a manos de los narcotraficantes) intensificando las desigualdades económicas y provocando una movilidad social de tipo «browniano» que al quebrantar las viejas jerarquías sociales, transforma los comportamientos, en particular los de los jóvenes. Para no mencionar ya el impulso que le confiere a la lucha armada, dotando de recursos necesarios a la multiplicación de sus frentes y a su «salto adelante», así como a otras de las modalidades de una violencia proteiforme.

Un efecto menos visible pero de igual importancia es que el narcotráfico contribuyó a ampliar la brecha entre la sociedad y el Estado. La desconfianza respecto del Estado, no es, por cierto, una cosa nueva en Colombia, tiene sus raíces en una historia multiseccular. Pero, a causa de la droga, una gran parte de la sociedad, mucho mayor que aquella que está directamente implicada en el tráfico mismo, ha definido sus propias normas, sus redes de influencia, códigos de transacción, sin entenderse de las regulaciones estatales y jurídicas, como no sea para desviarlas en su propio beneficio. Las fronteras entre lo legal y lo ilegal han desaparecido en muchos sectores. Confrontada a esta situación el resto de la sociedad, se va quedando sin razones para confiar en un Estado ausente y autista. Se ha producido una suerte de emancipación de la sociedad, pero de una sociedad fragmentada ella misma, parcelada, rebelde por tanto a las regulaciones de cualquier gobierno, y en ese sentido, muy poco «civil».

Hasta hace muy poco, la confrontación armada, no había tenido una incidencia decisiva sobre la sociedad o sobre las instituciones. Los núcleos de autodefensa campesina que surgieron al final del período de *La Violencia*, se circunscribían a regiones periféricas. A comienzos de los años 70, mientras que la utopía de la liberación armada estaba en su apogeo en otros países de América latina, las guerrillas colombianas contaban con unos pocos efectivos, que intentaban vanamente poner las reivindicaciones agrarias al servicio de un proyecto revolucionario. Es solo después de los años 80 que las guerrillas comienzan a multiplicar el número de sus efectivos y a controlar áreas circunscritas, afirmando su control. Si los defectos del régimen han podido, al igual que en varios de los países vecinos, conducir a la radicalización de diversos sectores, en sí mismos no bastan para explicar el crecimiento sostenido de las guerrillas que nos remite ante todo a los recursos provenientes de la economía de la droga, en plena expansión durante esos años cruciales, y también a la participación en los beneficios de «los nuevos polos de la industria extractiva». Aunque lleven los mismos nombres de los núcleos originales, e integren un buen número de veteranos en sus estados mayores, con su armamento cada vez más sofisticado y sus reclutas a sueldo, no guardan ya ningún parecido con los antiguos núcleos de «autodefensa». Lo único que conservan en común con ellos es su inserción en una sociedad rural cuyo peso demográfico, por cierto, disminuye constantemente a expensas de la población urbana.

Por lo demás, también en los años 80, la lucha armada y la transacción política van de la mano. Las guerrillas continúan presentándose como simples componentes de una oposición política que mantiene un pie en la legalidad, a imagen de esa relación simbiótica entre las FARC y el Partido Comunista. La fórmula de «la combinación de todas las formas de lucha» que durante mucho tiempo fue la doctrina de los comunistas, condensa esa ambigüedad. Ahora bien el régimen político colombiano tiene una larga tradición de transacciones con facciones que recurren a la fuerza. Desde las guerras civiles del siglo XIX hasta el Frente Nacional, diversos grados de compromiso con quienes se colocan en la ilegalidad han sido fundamento de la legitimidad.

A partir de 1981 las tentativas de negociación se suceden y algunas son coronadas por el éxito. En 1984 Belisario Betancur por momentos se aproximó a lo que hubiera sido un cese al fuego en regla con tres de las más importantes organizaciones guerrilleras. En 1990 y 1991 Virgilio Barco y César Gaviria consiguieron la desmovilización del M-19, del EPL y de otras organizaciones de menor importancia: la transacción consistió en la convocatoria de una Asamblea constituyente que iría a renovar a fondo algunas de las características de la participación política

colombiana<sup>3</sup>. En revancha, el ataque lanzado por el ejército contra la sede del estado mayor de las FARC-EP el mismo día de las elecciones a esa constituyente condujo a esta organización a endurecer aun más su orientación. Lo cual por otra parte tampoco impidió una nueva ronda de negociación en 1991 y 1992 con las propias FARC, el ELN y el EPL. La constatación del fracaso fue esta vez muy rápida.

Sin embargo el conflicto parecía suficientemente limitado como para que el gobierno pudiese considerar que mediante las armas se conduciría de nuevo a la guerrilla a la mesa de negociación. Lo que ocurrió al cabo fue todo lo contrario.

No será en verdad hasta 1995 que la cuestión de la confrontación armada se imponga como la mayor de las preocupaciones, y desplace así a la droga. Y no se debió precisamente a que la economía de la droga hubiese decaído, sino que la visibilidad de los narcotraficantes es mucho menor. Tras el práctico desmantelamiento del cartel de Medellín, se desmantela el cartel de Cali. Aun así subsisten una cantidad de pequeños carteles dispersos, tanto o más eficaces que las anteriores organizaciones, pero que se las arreglan para desaparecer del primer plano y de la escena política.

La guerra en cambio hace sentir su presencia de manera más ostensible. De ahí en adelante, y desde 1992, las negociaciones no se han reiniciado. El gobierno Samper es el primero en no haber adelantado ningún tipo de conversaciones con las guerrillas. Si en un comienzo, y también en los últimos meses de su administración ensaya algunas aperturas y promueve algunas iniciativas, su propia legitimidad es demasiado aleatoria para que esté en posición de imponer su voluntad a los militares y de aparecer como un interlocutor fiable a los ojos de las guerrilla. La confrontación abierta tiene entonces el campo libre, el cambio de percepción se impone sobre todos después de espectaculares reveses que le infligen las FARC al ejército desde 1995. Si hasta ese momento la idea de reducir a las guerrillas por la fuerza era discutible, de allí en adelante será ilusoria. Pero la difusión del conflicto armado, al igual que lo ocurrido con el narcotráfico con anterioridad, amenaza de aquí en adelante el funcionamiento de las instituciones y ya no tan solo la seguridad de las personas.

En esas condiciones la “política de paz” de Andrés Pastrana responde a dos urgencias: la necesidad de limitar la difusión de la confrontación pero también la urgencia, política, de reconstruir la autoridad de las instituciones. Y la frustración que han producido los anteriores y fallidos procesos de negociación obliga a la

---

<sup>3</sup>En principio lo que reclamaba el M19 era una reforma constitucional, junto a otros cambios. Las propias circunstancias políticas hicieron que se llegara a una Constituyente soberana, y que el EPL encontrara motivos para su propia desmovilización.

prudencia, y el nuevo presidente ya en funciones, al escuchar el vehemente pedido de negociación por parte de la guerrilla, debe discernir lo que hay en él de necesidad de acceder a una tribuna y amplificar sus objetivos, y lo que haya de sincera voluntad de poner fin a la violencia.

### *Transformaciones en la correlación de fuerzas y desinstitucionalización del conflicto*

Del hecho de que las guerrillas ejerzan un control casi completo de la décima parte de los municipios, que estén en condiciones de operar en prácticamente la mitad de ellos, no da sin embargo una aproximación suficiente de las modificaciones que se han producido en la correlación de fuerzas. Por lo demás, una gran parte del territorio, en particular allí donde hay procesos de colonización activos, se ha caracterizado siempre por procesos de una muy endeble presencia del estado, y el hecho de que redes legales e ilegales, llenen ese vacío no es nada nuevo. El hecho nuevo es más bien la capacidad de las guerrillas, más concretamente de las FARC (Pues el ELN está lejos de manifestar la misma capacidad de combate) de planear y llevar a cabo acciones militares de envergadura y de confrontar de igual a igual a las fuerzas armadas

La operación de 1996 contra la base de Las Delicias, en los límites de Caquetá y el Putumayo, marca el inicio de esa reorientación estratégica, el ataque de las FARC produce decenas de muertos y unos sesenta «prisioneros»<sup>4</sup>. En los meses siguientes, repiten ese tipo de operación. Su éxito más notorio se produce en marzo de 1998, en el Caquetá, cuando consiguen cercar a una unidad de élite antiguerrilla, infligirle pérdidas severas (al menos 80 muertos) y hacer de nuevo docenas de prisioneros. En el mes de Agosto de 1998, recién posesionado el presidente Pastrana, desatan una ofensiva simultánea en cerca de treinta puntos del territorio en el curso de la cual destruyen la base fortificada de Miraflores (Guaviare) mantenida por 400 policías de élite. Esta vez también, hay numerosos muertos, y así mismo una gran cantidad de prisioneros.

Las FARC de allí en adelante comprometen considerables efectivos en cada combate, muchas veces más de 500 hombres, y producen ataques simultáneos en escenarios muy alejados entre sí. Lo cual supone medios de transporte y de comunicación muy avanzados. Si no se puede hablar todavía de guerra de movimientos en razón de la discontinuidad de las operaciones, tampoco estamos

<sup>4</sup>En éste artículo empleamos la expresión «prisioneros» pues ya ha hecho carrera en la discusión interna, aunque somos conscientes de que sólo corresponde a una situación de guerra abierta, y que convendría hablar de «secuestrados», al igual que los civiles.

ya en la guerra de guerrillas clásica. La captura sistemática de prisioneros (en agosto de 1998 el número superaba los 250) demuestra que los éxitos militares están al servicio de un objetivo político: la voluntad de cumplir de manera progresiva los requisitos que el derecho internacional exige para el reconocimiento del «estatus de beligerancia»<sup>5</sup>

Frente a esta clase de ataques, las Fuerzas Armadas dan la impresión de estar desbordadas. Después de cada uno de los ataques permanecen estáticas, incapaces de una respuesta seria. Su presupuesto ha aumentado, pero su organización burocrática y su impreparación estratégica contribuyen a su ineficacia. Los Estados Unidos, que condenan la corrupción existente en su interior, y su colusión con los paramilitares, rehúsan por ahora proporcionar helicópteros y otros equipos modernos. Reservan por ahora su ayuda militar a la policía, que ha sido depurada y puesta bajo la dirección de un oficial de toda su confianza. Al respecto los militares solo encuentran dos actitudes en respuesta: delegar implícitamente a los paramilitares el cuidado de recuperar ciertos territorios, como en el caso de Urabá, y reagrupar sus efectivos abandonando las bases aisladas, lo cual significa dejar nuevas zonas a merced de los grupos armados ilegales.

Lo anterior no implica sin embargo que se haya producido un cambio drástico en la correlación de fuerzas. Expuestas a los ataques de las guerrillas en las zonas rurales, las fuerzas armadas controlan sólidamente los conglomerados urbanos. En cuanto a las guerrillas, sus victorias en varias regiones se han visto contrarrestadas por reveses y dificultades en otras, y por el fortalecimiento de los grupos paramilitares. Mas que las fuerzas armadas regulares han sido estos grupos los que han mostrado capacidad de disputar terreno a las guerrillas.

Desde 1994 los grupos paramilitares<sup>6</sup> han llegado a conformarse como un verdadero ejército antiguerrilla, que pretende, al igual que su enemigo, controlar territorios enteros. A diferencia de los grupos que los precedieron en los años 80, los nuevos grupos, bajo la dirección de Carlos Castaño<sup>7</sup>, se precian de haber roto con el padrinazgo tanto

---

<sup>5</sup>La liberación de los prisioneros de Las Delicias, la única que ha tenido lugar hasta el momento, se hizo con la presencia de representantes de la comunidad internacional, tras la desmilitarización momentánea de una vasta región.

<sup>6</sup>Aunque ha existido una controversia acerca del uso de la expresión, la adoptamos aquí, al igual que lo hace Fernando Cubides, en el artículo «La violencia de los paramilitares» de esta misma revista. De una vez por todas hay que subrayar que se trata de grupos que no provienen de una iniciativa militar, que han conseguido una autonomía, aun cuando los ejemplos de colusión sean frecuentes.

<sup>7</sup>El fundador fue su hermano, Fidel Castaño, miembro del Cartel de Medellín, quien luego desató una lcuha implacable contra Pablo Escobar. Actualmente se ignora si en verdad esa



de los militares como de los narcotraficantes. Desde luego que las cosas no son tan simples. Es obvio que la economía de la droga sigue proporcionándoles recursos invaluable, tanto como a los demás actores del conflicto, y son muchos los narcotraficantes que apoyan sus esfuerzo bélico, aun cuando se oculten bajo el rótulo de simples propietarios agrarios. En cuanto a los militares, la actitud que ha prevalecido es la de apoyar sus acciones, o cerrar los ojos ante ellas, como lo ha establecido la justicia en varias ocasiones. Puede establecerse no obstante que las nuevas organizaciones paramilitares cuentan con amplia autonomía y con apoyos que se extienden más allá de los directos beneficiarios, entre los que se cuentan aquellos los afectados por las constantes exacciones de la guerrilla, y habitantes de poblaciones afectadas así como ex guerrilleros. Estos últimos forman un porcentaje elevado del total de efectivos de los paramilitares, sea que hayan escogido cambiar de campo por motivos individuales, o como en el caso de los antiguos militantes del EPL, por que no hayan encontrado otros medios de escapar a la persecución que las FARC desató en su contra, una vez reinsertados.<sup>8</sup>

Los paramilitares han conseguido en efecto expulsar a la guerrilla de muchas regiones. Las «Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá» su primer núcleo y el más importante, desde 1994 han recuperado Córdoba y la mayor parte de Urabá, lo que significa una grave pérdida para las FARC, pues el control de Urabá significa el acceso a los dos océanos y a Panamá. «Las Autodefensas Unidas de Colombia» nueva denominación adoptada por Carlos Castaño para indicar el reagrupamiento de todos los grupos locales bajo una misma dirección, un reagrupamiento en verdad muy relativo<sup>9</sup>, adelantan su ofensiva atacando numerosas regiones que controlan las guerrillas.

Ingresan, propinando severos golpes al ELN que se había implantado en el Magdalena Medio, al que llegó a considerar como su corredor estratégico, un corredor cuyo epicentro es la ciudad de Barrancabermeja, principal centro de

---

sustitución en la cúpula de la organización se haya debido a la muerte de Fidel Castaño, no hay pruebas fehacientes de ella, puede haber obedecido al interés de designar un comandante que no pueda ser acusado de tener vínculos con el tráfico de droga.

<sup>8</sup>Las FARC se esforzaron por recuperar las posiciones que con anterioridad mantenía el EPL. Desarrolló una persecución implacable de quienes habían abandonado las armas. Una guerra larvada que produjo numerosas masacres. Entre 1984 y 1987 las FARC EP y el EPL habían desarrollado así mismo una guerra sin cuartel.

<sup>9</sup>Pues numerosos grupos se forman como producto de iniciativas locales, y conservan su autonomía. Un grupo tan importante como el que dirige Víctor Carranza, el principal patrón de las esmeraldas, detenido en 1998, con ramificaciones en el Meta, conserva su distancia respecto de Castaño.

refinamiento de petróleo del país, que contiene también el acceso a las explotaciones de níquel y de carbón así como reservas auríferas. Han enfrentado a las FARC-EP y al ELN en el nordeste de Antioquia en una zona que contiene al menos el 50% del potencia hidroeléctrico del país. Los anteriores ejemplos son ilustrativos de que la confrontación se da por el control de polos económicos esenciales. Pero los paramilitares también han sido capaces de desatar ataques en las regiones de colonización y periféricas como es el caso del Putumayo, y ciertas zonas del Meta que hasta hace poco eran fortines exclusivos de las FARC y epicentros del cultivo de coca.

La relación global de fuerzas es entonces muy fluida. Pero el hecho de que sea definida ante todo por dos protagonistas ilegales indica una creciente desinstitucionalización del antagonismo y es la población civil la que sufre las consecuencias. Semejante situación, aunada a los reveses de las fuerzas armadas, ha hecho imperativo el inicio de los diálogos, pero no es que precisamente confieran un posición de fuerza al gobierno.

### *Los «costos de la violencia» y la crisis económica*

Los dirigentes de los principales grupos industriales y agrícolas se han ido adhiriendo a la idea de una solución negociada. No es que en la etapa anterior fueran partidarios de la guerra a cualquier precio; pero durante mucho tiempo, no tuvieron razones para considerar que la violencia amenazara sus intereses económicos. Colombia había atravesado la llamada «década perdida» en mejores condiciones que los demás países latinoamericanos. La liquidez que aseguraba el tráfico de drogas había evitado los riesgos del endeudamiento externo excesivo dando un fuerte impulso a las inversiones en la construcción y en el sector financiero. La violencia tampoco había afectado sensiblemente a la agricultura, ni tampoco a la ganadería. Aunque implicara riesgos individuales, en la medida que no afectara los beneficios colectivos, las elites económicas no parecían tener motivos para movilizarse resueltamente para ponerle término<sup>10</sup>

El cambio de actitud está ligado al descubrimiento de los «costos de la violencia», que es el tema central de un informe publicado en 1998 por el Departamento Nacional de Planeación. Establece que para el período entre 1991 y 1996 los costos netos de la violencia equivalieron al 18,5% del PIB, es decir un promedio anual de

---

<sup>10</sup>Resumo aquí el planteamiento presentado en 1990 por Jesús Antonio Bejarano en su ensayo «Democracia, conflicto y eficiencia económica» en: *Construir la paz*; Bogotá, Presidencia de la República, 1990.

3.1% del PIB. Al discriminar tales costos se pueden representar así: la pérdida de vidas humanas representaría el 43%, el incremento de los gastos militares el 30%, los gastos en seguridad privada el 23%, el terrorismo el 2%, y el incremento de los costos de salud vendría siendo el 1%<sup>11</sup> la confrontación armada propiamente dicha sería responsable de la mitad de esos costos, aproximadamente, y la violencia urbana, de la otra mitad.

La validez de las cifras importa menos que la visión general que orienta el informe: la persistencia de la violencia, se analiza como el mayor obstáculo al desarrollo económico. La necesidad de que el análisis incursione en las cifras económicas para esclarecer los efectos de la violencia, nos revela mucho sobre la mentalidad de los dirigentes. Nos pone de presente hasta qué punto la violencia era percibida como lejana, y, en definitiva, banal. De allí en adelante la paz se convierte en «rentable» y por ende deseable.

El anterior diagnóstico sale a la luz justo cuando la gravedad de los síntomas de la crisis económica comienza a ser aprehendida. Los responsables no ignoran que el gobierno Samper pagó su mantenimiento en el poder mediante concesiones a todos los grupos económicos de presión y dejó las arcas vacías. Y sin embargo todavía no se dejan ver los desequilibrios que se acumulan desde los años 90, producto de una descentralización mal concebida, de inversiones especulativas financiadas por un endeudamiento incontrolado, y de las dificultades que produce una apertura económica incontrolada que se traducen en grandes déficits, tanto de la balanza de pagos como de las finanzas públicas.

Lo profundo de la recesión va a sorprender a todos los observadores: durante el segundo semestre de 1998, el PIB disminuye un 4%, y para el año en su conjunto el crecimiento es nulo. El desplome continúa en el primer semestre de 1999, para el que según los estimativos la caída del PIB será de más del 6%. Esos mismos estimativos señalan que si bien en el segundo semestre se presentará una cierta reactivación, en conjunto para el 99 el retroceso será del 2%. Todos los sectores se ven afectados, la banca, la industria y la agricultura, la construcción que registra un auténtico hundimiento. Las medidas adoptadas por el gobierno (alza en las tasas de interés y recortes fiscales) se dirigen a reducir el déficit público, pero no contienen nada que pueda garantizar una reactivación.

Desde 1930 Colombia nunca había afrontado una coyuntura semejante. Los efectos sociales son devastadores: el desempleo ronda el 20%, los salarios han

---

<sup>11</sup> Departamento NACIONAL DE Planeación: «La paz: el desafío para el desarrollo», Bogotá 1998.

bajado, muchos empresarios se han declarado insolventes, la mayoría de los departamentos, y muchos municipios están en bancarrota, y numerosas instituciones de salud y educativas han declarado la cesación de pagos.

El tema del costo de la violencia, se ha visto así superado, No es que deje de considerarse que la violencia ha contribuido a la crisis, así solo sea por la vía de la incertidumbre que determina y del desestímulo a la inversión productiva, sino que se hace patente que el mal es más profundo, y concierne al funcionamiento de las instituciones y a las bases del desarrollo colombiano. Las perspectivas de paz se han alterado: si el deseo de disminuir los gastos dedicados a la guerra es mayor que nunca, el gobierno carece sencillamente de los recursos para llevar a cabo los programas sociales y económicos que se esperaban. Y ve entonces que se escapa una oportunidad de convocar opinión a favor de sus políticas.

### *Los diálogos de paz: un año de tratativas sin conclusión* *Un momento decisivo*

Guerrillas y gobierno poseen una relación muy diferente con el tiempo, como varias veces se ha señalado. Con varias décadas de existencia e impregnadas de una «mentalidad campesina» las primeras sabrían utilizar muy bien la espera, tanto en la guerra como en las negociaciones. A la inversa, los distintos gobiernos no parecen tener memoria, y lejos de extraer lecciones de los fracasos de sus predecesores, cada uno pretende partir de cero y conseguir en el término de cuatro años resultados definitivos, cuatro años que en términos prácticos quedan reducidos a dos en razón del desgaste inevitable.

La anterior formulación merece reconsiderarse, por lo menos en lo que hace a las guerrillas. En primer lugar por que su situación real ya no corresponde a esa imagen de inserción en un mundo campesino, pues el reclutamiento se lleva a cabo frecuentemente en un mundo urbano, y el propio mundo rural ha perdido su homogeneidad bajo el efecto de nuevas olas migratorias, en ambos sentidos. de lo rural a lo urbano y de lo urbano a lo rural, y además deja de lado los rasgos particulares de la actual coyuntura. En segundo lugar el potencial militar de las guerrillas, principalmente el de las FARC-EP tal vez le posibilite continuar ampliando su dominio territorial pero con el riesgo creciente de provocar una reacción cada vez más fuerte de los paramilitares, y de producir un cambio de actitud de los Estados Unidos que signifique mayor ayuda a las fuerzas armadas.

¿Acaso el dominio territorial constituye la única ambición de las guerrillas? Varios elementos hacen dudarlo. Tanto las FARC como el ELN no vacilan en

poner por delante objetivos políticos globales, invocando la necesidad de transformaciones a profundidad de las estructuras sociales y del régimen político, o incluso de una «redistribución del poder». Se está entrando en una fase en la que encuentra de nuevo su lugar su lugar la redefinición de finalidades políticas, de manera paralela a las cuestiones de estrategia militar y territorial. La aspiración al tratamiento de parte beligerante llega a ser parte de esos objetivos. Claro está que en esa dirección las guerrillas enfrentan un obstáculo considerable: su falta de credibilidad política, incluso en las regiones bajo su control, y sobre todo en las ciudades. Desde hace tres años las FARC se esfuerzan en suplir esa ausencia mediante un partido político clandestino llamado «movimiento bolivariano». Siendo clandestino es imposible medir su audiencia, el volumen de sus adhesiones, que probablemente sea reducida. Pero en todo caso las FARC se proponen capitalizar la insatisfacción suscitada por la recesión económica y sus efectos. No deja de ser sintomático que no cesen de proclamar ahora que tienen el propósito de reagrupar toda la oposición, es decir todas las fuerzas que reclaman ser de la «sociedad civil». En suma, si nada deja suponer que van a abandonar su cautela, todos los indicios parecen sugerir que consideran que han llegado a un momento decisivo.

Al contrario, el gobierno Pastrana no ha logrado escapar al ritmo de sus predecesores. En muchos aspectos quiso ir más rápido, y para tener un comienzo auspicioso, de entrada quemó todas sus naves, al acordar a las FARC, sin condiciones la desmilitarización territorial que pedían, al riesgo de no poder hacer otras concesiones durante la continuación de los diálogos. Decreta la disolución de las asociaciones de vigilancia CONVIVIR, formadas en el gobierno anterior bajo la égida de algunos gobernadores y del ejército, pero acusadas de servir de cuerpo auxiliar de los paramilitares. En vez de aprovechar la experiencia de los anteriores negociadores, confía la responsabilidad de los contactos a un cercano suyo, Víctor G Ricardo, que nunca antes había tenido ningún género de intervención en problemas de violencia. Decidido a tener entre sus manos la dirección de las discusiones, rechaza toda ingerencia de los gobernadores o del Congreso y da la impresión de ignorar a los militares, lo cual tiende a disminuir rápidamente su margen de maniobra política. Toda su acción parece reposar en el desafío de crear de una vez por todas un clima de confianza, como lo testimonia su visita personal a Marulanda. Su recorrido es similar en ese sentido al de Belisario Betancur, diez y seis años antes, pero además del fracaso completo con el que se selló aquella iniciativa, el hecho de que las guerrillas creen que ha llegado el momento decisivo, basta para considerar que la situación no tiene nada en común.

A las pocas semanas de iniciarse el gobierno descubre que la perspectiva de negociación es en sí misma un factor de exacerbación de los conflictos. En Agosto de 1998 la gran ofensiva emprendida por las FARC subraya que las negociaciones no pueden dissociarse de lo que pasa en el terreno. De su parte el ELN que se siente dejado a un lado, decide desarrollar múltiples acciones para llamar la atención de Andrés Pastrana. Los paramilitares, a quienes se niega el estatus de interlocutores políticos, deciden hacer lo que sea para hacerse invitar a la mesa de negociación. No es entonces *una* negociación la que se abre, sino al menos tres. Y eso sin contar las que, aunque de un orden distinto, van a surgir entre el gobierno, los militares, la clase política, los Estados Unidos, y otras partes interesadas.

### *El "diálogo" con las FARC*

Desmilitarizar cinco municipios no es una decisión cualquiera. En 1994 las FARC solo pedían que el despeje se hiciera en un municipio, la Uribe, y los militares se habían opuesto frontalmente. La nueva relación de fuerzas determina un gesto de una amplitud mayor y ya los militares carecen del prestigio suficiente para intentar oponerse.

Es verdad que las FARC dominan desde hace tiempo esta región de 42000 kmts<sup>2</sup> de unos 80000 habitantes. Es un territorio de gran importancia pues es una encrucijada entre la Amazonia y el altiplano de Bogotá, y entre la cordillera oriental y los Llanos. Así mismo contiene una porción significativa de los cultivos de coca. Reconociéndola como "zona de distensión" según el lenguaje oficial, el gobierno buscaba tal vez delimitar un espacio en el cual los guerrilleros se reagruparan llegado el momento, como se había hecho antes con el M-19 y el EPL. No se definieron sin embargo con antelación suficiente, las prerrogativas que habría de conservar el Estado. Todo lo que se estableció es que los alcaldes conservarían sus funciones, y que la desmilitarización duraría tres meses.

Si el gobierno esperaba así facilitar la apertura de negociaciones, debió decepcionarse muy pronto. Ya en las primeras conversaciones surgen dificultades sucesivas, que procuraremos resumir enseguida.

El primer retraso fue producto de un litigio menor<sup>12</sup> Por fin, un mes después de la fecha prevista, el 7 de enero de 1999 el «diálogo» pudo comenzar para fijar

---

<sup>12</sup> El gobierno pretendía mantener un centenar de soldados, sin armas, con el fin, según la versión oficial, de proteger las edificaciones en donde se alojarían los delegados gubernamentales. Cuando las FARC amenazaron con romper los diálogos, el gobierno debió ceder.

los procedimientos y las agendas de negociación. Para la ceremonia de iniciación de los diálogos se había previsto el encuentro con Marulanda en presencia de representantes de numerosos países. Fue un encuentro fallido, pues Marulanda decidió a última hora no asistir, y Pastrana debió pronunciar su discurso al lado de una silla vacía. Los diálogos se inician, pero a los pocos días, una serie de masacres cometidas por los paramilitares que producen más de 130 víctimas, incita a la guerrilla a decidir la suspensión de esas conversaciones por al menos tres meses y para reiniciarlas exige que el gobierno tome medidas concretas para destruir la organización paramilitar y que destituya a generales y oficiales superiores que le prestan su apoyo, y cuyos nombres ofrece en un listado. El gobierno por su parte se esfuerza en satisfacer, parcialmente al menos esas exigencias: crea unidades contra los paramilitares y acelera la disolución de las asociaciones Convivir, y procede a separar de sus cargos a dos de los generales que figuraban en la lista. Las FARC no eran en verdad las únicas en cuestionarlos: los Estados Unidos se habían sumado a las acusaciones en contra suya, y la Comisión de las Naciones Unidas para los derechos humanos, amenazaba por su parte con condenar a Colombia. En esas condiciones el gobierno no tenía alternativa.

Las conversaciones se reinician entonces el 20 de Abril, y ante la amenaza de un nuevo estancamiento, el propio Pastrana decide acudir el 2 de mayo a encontrarse de nuevo con Marulanda. Esta vez la reunión consigue su propósito: el presidente y el jefe guerrillero firman un protocolo de intención acerca de la modalidad que tendrán las negociaciones, que prevé incluso la formación de una «comisión de acompañamiento». El 6 de mayo se avanza otro paso: las dos partes se ponen de acuerdo en una lista de temas que se abordarán durante las negociaciones, y por fin parece haber un camino claro en dirección a ellas.

Y no obstante se trata tan solo de una ilusión: tres nuevas y graves crisis van a bloquear de nuevo el proceso. La primera debida a los militares y provocada por la prórroga de la zona desmilitarizada. Se acordará una nueva prórroga ante el agotamiento de los plazos, y los retrasos acumulados hacen indispensable acordar una segunda. Mientras Víctor G Ricardo sugiere que no se señale en adelante una nueva fecha, el Ministro de Defensa anuncia súbitamente su renuncia, y la inconformidad se extiende: 17 generales y 200 coroneles, es decir algo así como la mitad de la alta oficialidad en activo hacen otro tanto. Se trata de una situación sin precedentes que saca a la luz un malestar que no se circunscribe a las cuestiones de calendario. Si el presidente en fin consigue que los altos militares reconsideren su decisión, y si, en acuerdo con las FARC, se consigue que el despeje se mantenga por otros seis meses, éste incidente adquiere el valor de advertencia y dejará, como veremos, sus huellas.

La segunda crisis la producen las FARC y se produce el mismo día en que las conversaciones deben recomenzar. Justamente la semana anterior se habían superado varias dificultades, y la guerrilla obtuvo un triunfo simbólico al conseguir que las conversaciones se retomaran, precisamente en el municipio de La Uribe. En éste caso, la cuestión es que en la fecha prevista, el 7 de Julio, y como una demostración de fuerza las FARC lanzan una fuerte ofensiva en por lo menos veinte puntos del territorio. Si una ofensiva de esa naturaleza se inscribe en la lógica que han tenido las conversaciones según la cual se desarrollarían en medio de la confrontación y se venían dando acciones militares de importancia la víspera misma de cada encuentro, de hecho en este caso retrasa su reiniciación pero además y sobre todo, disminuye las esperanzas de la opinión. Por lo demás en ésta ocasión se salda con bajas importantes para la guerrilla, que habría tenido, según fuentes militares, al menos 200 muertos y centenares de heridos. En todo caso demuestra que las FARC pretenden mostrar su fuerza siempre antes de cualquier amago de negociación.

La tercera de las crisis es imputable a las dos partes. Y nos remite de nuevo al estatus de la zona de despeje. Múltiples pruebas han demostrado que los guerrilleros que participaron en la ofensiva que acabamos de mencionar provinieron de allí y regresaron a éste territorio después de los combates. Otras informaciones indican que las FARC proceden allí a un reclutamiento masivo y al entrenamiento de sus nuevos combatientes, y almacenan considerable cantidad de armamento y munición. Y más allá del aspecto militar, es la cuestión de la soberanía de la zona la que está en juego. A medida que pasa el tiempo se hace evidente que nada se contempló acerca de las respectivas prerrogativas del Estado y de la guerrilla en los municipios del despeje. Por su parte la guerrilla hace todo para demostrar que ejerce allí una soberanía plena. Es la garante del orden, ya de manera directa, ya mediante una policía cívica seleccionada con su asentimiento. Administra su propia justicia, sin dejar actuar a la fiscalía llegando a expulsar a sus representantes: en julio anuncian la «ejecución» de varios sospechosos en virtud de la aplicación de su código interno. En suma, manifiestan que se consideran a sí mismos como un Estado alternativo, y que por ello cumplen una de las condiciones para ser reconocidos como parte beligerante. Es evidente que el gobierno no puede aceptar esa exigencia. Menos aún cuando hay indicios de malestar con la gestión de la guerrilla. Se produce algo sorprendente: en agosto de 1999 se registran manifestaciones de protesta, en las que los habitantes piden la presencia del Estado, y los alcaldes, a los que se les consideraba *a priori* cercanos a la organización armada, se hacen eco de esa petición. En esas condiciones el gobierno exige la formación de una Comisión internacional de verificación prevista por el acuerdo del 2 de mayo, pero además el añade algo no contemplado en dicho acuerdo: que la Comisión controle el comportamiento



de la guerrilla en esa zona. Las FARC se oponen con firmeza a esa proposición que vendría a contrarrestar sus prerrogativas. En la medida en que el gobierno lo considera una condición previa, el inicio de las negociaciones se aplaza sin fecha a la vista.

Es posible que el gobierno haya moderado su exigencia, para salir del impasse. Hasta éste momento todo parece sugerir, que incluso si las negociaciones se abrieran, su harían manifiestos nuevos obstáculos.

En el curso de estas conversaciones, las FARC se han esforzado en mostrar que tiene un as entre sus manos, y han obligado al gobierno a improvisar sus respuestas. Las repetidas suspensiones y aplazamientos así lo indican. Pero hay más, se designan como sus portavoces aquellos cuadros conocidos por pertenecer a la corriente más militarista y más dura, y directamente implicados en los asaltos a cuarteles y poblaciones, y en secuestros. Si la actitud de Marulanda suele ser conciliadora, su adjunto militar, Jorge Briceño, conocido como el Mono Jojoy, se las ingenia para dar declaraciones «provocadoras», por asumir el rol de aguafiestas,<sup>13</sup> como si no le importase la suerte de las negociaciones.

En todo caso el acuerdo de mayo acerca de una agenda común representa un avance indudable. Aunque sea lo suficientemente amplio y lo suficientemente difuso para dar pie a toda suerte de maniobras dilatorias. Tomando como base diez puntos que figuran desde 1993 en el programa de las FARC, incluye tanto la reforma agraria como la transformación del Estado. Y se le añaden otros temas, que, según el esquema convenido, deben ser debatidos tanto en la mesa de negociación como con «las fuerzas vivas del país»<sup>14</sup> Precisa además que la puesta en aplicación de cada acuerdo parcial, será debidamente constatada, para que dicho acuerdo pueda considerarse cumplido. Lo claro es que, por ejemplo la reforma agraria no es asunto de un día para otro, y que acerca de su grado de realización pueden surgir toda clase de diferencias.

Es lícito preguntarse entonces si tras la agenda oficial no hay otra agenda, con objetivos y condiciones más inmediatas.

---

<sup>13</sup>En enero de 1999, Briceño por ejemplo anunció que si el Congreso no votaba la ley para facilitar en intercambio de prisioneros, las FARC procederían al secuestro de personalidades políticas para obligarlos a aceptar sus exigencias.

<sup>14</sup>El acuerdo prevé además de la negociación propiamente dicha, una «comisión temática» compuesta de guerrilleros y de miembros de la sociedad civil, que haría una gira por distintas ciudades para llevar a cabo «audiencias públicas» acerca de los problemas del país.

Desde agosto de 1998 las FARC convirtieron en un asunto prioritario el intercambio de prisioneros, e hicieron de él una condición previa de cualquier avance. Desde entonces no han dejado de insistir en el asunto y de aumentar el número de prisioneros en sus manos; en un año pasaron de tener 270 a tener más de 500. Han de tener razones de peso para que el intercambio adquiera tal importancia. La razón fundamental es sin duda una razón política: como lo hemos sugerido antes se trata de allanar el camino hacia el reconocimiento internacional del estatus de beligerancia. Prueba de ello es que rehusan hacer un intercambio por amnistía o medidas de gracia de parte del estado, como lo ha propuesto el gobierno. Exigen una ley, y aún una ley «permanente» que permitiría en el futuro un intercambio automático. Si el hecho de asimilar las personas que ellos tienen a prisioneros de guerra es de suyo una manera de reconocer como tal una situación de guerra interna según el derecho internacional, la ley que piden las FARC lo haría más explícito todavía. Algunos analistas <sup>15</sup> consideran que la exigencia del intercambio responde también a una razón militar. Las FARC han puesto de presente que quieren incrementar el número de sus efectivos hasta tener 30.000 hombres. Para cumplir ese objetivo necesitan con urgencia cuadros y comandantes experimentados y aguerridos, como son la mayoría de los guerrilleros hoy en prisión. Y es más probable aún, que quieran ante todo recuperar militantes políticos, capaces de reforzar su penetración en la sociedad. Como quiera que sea, en tanto las FARC hagan de esa exigencia un condición previa, las negociaciones pueden paralizarse.

La segunda de las prioridades, concierne a la acción del Estado contra los paramilitares. Lo menos que puede decirse es que las fuerzas armadas no han demostrado un gran celo en su persecución. Con sus acciones, los paramilitares pueden en cualquier momento poner en riesgo el desarrollo de las negociaciones. En repetidas ocasiones han anunciado que se proponen desarrollar acciones en la zona de despeje; y parecen resueltos a conseguir que se les reconozca como un actor político. En esa dirección multiplican los esfuerzos por lograr un apoyo más amplio: en las zonas bajo su control, por ejemplo, lanzan programas sociales pilotos o anuncian campañas contra la corrupción política.

En resumen la suerte de las negociaciones con la guerrilla más importante, es incierta, pero otro tanto vale para lo que ocurre con el ELN.

---

<sup>15</sup>En particular Alfredo Rangel especialista en cuestiones de estrategia, en sus comentarios en El Tiempo.

### *Las conversaciones con el ELN*

Es evidente que Pastrana considera que la negociación con el ELN está subordinada a la de las FARC. No solo por que su dominio territorial sea menor. En donde quiera que haya logrado implantarse en los años recientes ha procurado construir un «poder local», con resultados muy desiguales. Su capacidad militar es también mucho menor, no está en condiciones de llevar a cabo operaciones de envergadura, y su dispositivo ha sido debilitado por las acciones paramilitares, de las que ha sido el blanco predilecto. En donde quiera que se debilitan sus posiciones es las FARC la que tiende a sustituirlo.

El ELN ha manifestado tanto como las FARC su deseo de entablar negociaciones. En España, en febrero de 1998, firmó con representantes del gobierno y de la sociedad un documento secreto delineando la modalidad de las negociaciones. Su filtración a la prensa hizo de él un documento caduco. En julio del mismo año en Maguncia se retomaron varios de esos principios. El ELN se comprometió incluso a no recurrir al secuestro sino de una manera selectiva, lo cual a sus ojos era un paso en dirección a la «humanización del conflicto»<sup>16</sup>

Si el gobierno presta escasa atención a esas manifestaciones de buena voluntad, es en parte por que el ELN no lo considera como su interlocutor principal en una eventual negociación. Esta organización guerrillera da por supuesto que adelanta un diálogo directamente con «la sociedad civil». Por ello propone la reunión de una gran «convención nacional» en la que participarían todos los actores de dicha sociedad civil.

Hacia octubre de 1998 el proyecto parece precisarse. Tras un encuentro con la presencia de representantes del gobierno colombiano, se concluye un acuerdo que establece que la convención se reunirá durante ocho meses en territorio colombiano. Su propósito es formular un vasto programa de reformas. Pero en febrero de 1999, tras un nuevo encuentro, en Caracas, todo esto vuelve a desdibujarse. El ELN exige la desmilitarización de cinco municipios situados en su zona de influencia en condiciones semejantes a las que ha obtenido con antelación las FARC. El delegado gubernamental rechaza esa demanda de inmediato. Era difícil para el gobierno acoger una exigencia objeto de críticas muy fuertes pues la pretensión del ELN incluye zonas de explotación petrolífera y de minería en la que el Estado no puede

---

<sup>16</sup> Tan pronto fue conocido ese documento fue objeto de numerosas críticas. El ELN se comprometía allí a no secuestrar menores de edad, personas de más de 65 años y mujeres encintas. Lo que equivalía a aceptar secuestros de todas las demás categorías. Por lo demás el ELN tampoco respetó el compromiso que anunciaba.

arriesgar que su soberanía sea disputada. En su lugar el gobierno propone fórmulas de compromiso, ya fuere una desmilitarización que incluya al ELN, o una parte de la zona desmilitarizada para las FARC, pero es evidente que el ELN no quiere eso.

Las aventuras a las que se lanza de inmediato el ELN interrumpen las discusiones; los tres secuestros colectivos seguidos (el avión de Avianca, la iglesia de Cali y el de un grupo de pescadores cerca de Barranquilla) provocan tales reacciones en la opinión que el gobierno suspende oficialmente todo contacto con el ELN e inclusive reconsidera el reconocimiento de su estatus político. Por su parte el ELN no hace nada por mejorar la situación. Aunque libera a una parte de los secuestrados, pide rescates por lo demás como si se tratara de secuestros «ordinarios». De tal modo que, lo que parecía una imitación de los métodos que las FARC había utilizado para llegar a un resultado político, con la sensible diferencia en este caso de que se trata de civiles, no deja de ser reconocida como una acción delincencial.

Pero ¿los obstáculos en las negociaciones son la explicación de este curso errático? De hecho el ELN atraviesa una crisis muy profunda. Sus diversos frentes siempre han sido muy autónomos, pero la autoridad simbólica del cura Perez mantenía una cierta cohesión. Su muerte en 1998 acentúa las tendencias centrífugas; su sucesor Nicolás Rodríguez Bautista («Gabino») está lejos de tener el mismo prestigio. En algún momento el ELN parecía contar con las simpatías de algunos sacerdotes y de sectores populares vinculados a la teología de la liberación y a un modelo «comunitario»; pero la evolución de la Iglesia tiende ahora más bien a aislarlo; al asesinar al obispo de Arauca, y secuestrar a un párroco del Norte de Santander, se hace patente de ese sector de población. El secuestro masivo que lleva a cabo en un templo de Cali provoca la excomunión de los responsables por el arzobispo de Cali, una manera de recurrir a la tradición para hacer más que evidente el fin de cualquier «afinidad electiva». A todo lo anterior se suman los problemas de financiamiento: mucho menos implicadas que las FARC en la economía de la droga, el ELN depende para su financiamiento de los secuestros y de las extorsiones sobre compañías petroleras, y debido a ello uno de sus frentes, el Domingo Laín que opera en Arauca, en las cercanías del pozo de Caño Limón recibió en su momento un particular impulso. Pero las compañías se muestran cada vez más reticentes, en la medida en que la rentabilidad de estos puntos de explotación disminuye, del propio frente Domingo Laín da muestras de estancarse, y de allí en adelante todos los frentes practican indiscriminadamente el secuestro, aun a costa de su imagen y credibilidad. Todos estos factores, sumados a la presión de los paramilitares, reducen más aún el potencial propiamente militar de la guerrilla, aunque no por ello aminoran su capacidad destructiva.

Los actos más recientes son reveladores de la «fuga hacia adelante» por parte de una organización cuya cohesión está en duda. Oscilando entre las negociaciones por rescate y la escatología del encuentro con la sociedad civil, el ELN convierte el estilo trágico y dostoyevskiano en móvil revolucionario. Así que el reinicio de las conversaciones, se circunscribe a las transacciones sobre la liberación de los rehenes. Los múltiples intermediarios que toman parte en esta serie de transacciones presionan al gobierno para que se abra alguna salida política, y se acepte el despeje de un municipio, así sea transitorio y bajo cualquier modalidad. El gobierno vacila en todo caso y los militares son muy reticentes. No está por demás decir que en esas condiciones si se llevara a cabo la anunciada convención, la «sociedad civil», más amenazada que nunca, ya no mostraría el mismo entusiasmo que en Maguncia, ni los programas de transformación social que se formularan, permitirían acelerar las negociaciones con el gobierno.

### *El aislamiento del gobierno*

Los tropiezos de estas conversaciones no pueden sino debilitar a un gobierno que no cuenta con un sólido apoyo político. No habiendo asociado en principio al conjunto de la clase política a su estrategia de negociación, Pastrana asumió el riesgo de hacerse personalmente responsable de sus resultados. Si Horacio Serpa y los liberales «samperistas» se cuidan muy bien de hacer una oposición abierta, tampoco ocultan su escepticismo respecto del manejo de estas conversaciones. Así es de que mantienen su reserva y su cautela incluso cuando, tras los primeros tropiezos, Pastrana hace algunos gestos en esa dirección. El presidente no logra que el Congreso vote medidas destinadas a dejarle las manos libres en una negociación. El rápido deterioro de la situación económica acentúa esa actitud de espera de parte de la clase política, y en especial de las corrientes que no están representadas en el gobierno, una actitud que puede resumirse en la siguiente fórmula: criticar abiertamente la política de paz puede prestarse a malentendidos, aprobarla equivale a hipotecar el futuro.

Los militares, protagonistas esenciales del proceso, adoptan una actitud análoga. En ningún momento han hecho público su desacuerdo con las negociaciones. La grave crisis del 26 de mayo de 1999, hizo evidente que eso sólo significa que su adhesión es aparente y que tras ella hay toda clase de sentimientos. Aquí también se hacen patentes los cuestionamientos al manejo político de Pastrana. La renuncia del Ministro de Defensa Lloreda fue provocada por habérselo marginado de importantes decisiones relacionadas con los diálogos. Pero vimos que no se trataba únicamente de un alto funcionario en desacuerdo con medidas o políticas

gubernamentales. El hecho de que la mitad de los altos oficiales hayan sido solidarios con su gesto, demuestra que el malestar es más profundo.

Los militares no solo confrontan constantes críticas a su eficacia, y en ocasiones al grado de corrupción existente en su seno, se les acusa además de mantener vínculos con los paramilitares, y de ser directamente responsables de muchas de las violaciones a los derechos humanos. Las ONG locales, la justicia colombiana no son los únicos en establecerlo, también lo han hecho los Estados Unidos. Estos últimos han intervenido abiertamente, como cuando dirigieron un ultimátum a E. Samper para que se disolviera una de las Brigadas, una brigada de inteligencia, y los argumentos que acompañaban el ultimátum debieron ser muy convincentes pues la medida se tomó a los pocos días. Así mismo han ejercido otras presiones, no siempre muy discretas. Es difícil para las fuerzas armadas, tolerar tal grado de ingerencia. Les es igualmente penoso admitir que la justicia los inculpe, lo que ocurre con frecuencia. Pero lo que les resulta más intolerable es que las FARC publique una lista de diez generales cuestionados por tales abusos, y que el gobierno, lejos de defenderlos proceda a relevar a dos de ellos.

Sus reacciones denotan un corporatismo defensivo: No solamente las fuerzas armadas no han transitado por un proceso de depuración como el de la policía, sino que se habituaron a que la justicia militar les asegurase un práctica impunidad.<sup>17</sup>

Pero tales reacciones expresan a la vez el desconcierto de unas fuerzas armadas que, sumisas a los vaivenes de un poder civil incapaz de asignarles una misión clara, libran una guerra contra un adversario instalado en el seno de la población civil. ¿En dónde comienza y en dónde termina su colaboración con los paramilitares? Cuando quiera que la guerrilla y los paramilitares han tenido enfrentamientos en las cercanías de su propia zona de operaciones ¿cuál ha sido su actitud? La respuesta ha esos interrogantes es muy variada, y muy a menudo reside en cada responsable de unidad o de brigada.

Pero hay varios indicios que el comportamiento de una gran parte de las fuerzas armadas está evolucionando. Deseosos de reforzar su imagen profesional y de sustraerse a posibles sanciones, y más preocupados aún por garantizar la ayuda financiera y técnica de los Estados Unidos, el ejército parece haberse distanciado de los paramilitares. Prueba de ello es el hecho que los militares implicados en

---

<sup>17</sup> Hasta hace poco la justicia militar se hacía cargo incluso de los delitos cometidos fuera de servicio. Hay que decir también que las fuerzas armadas se opusieron a que el delito de desaparición forzada se introdujera en el Código penal. Los casos de desaparición se cuentan por centenares.

masacres y asesinatos sumarios se ha reducido drásticamente en 1999. Pero también hay indicios acerca de que persiste una minoría, que de cuando en cuando se inclina al mayor extremismo, sin escrúpulo alguno. La existencia de ese grupo quedó patente durante el gobierno de Samper. Algunos de ellos aparecen inculpados en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, en 1996, crimen que parece ser el resultado de un plan de desestabilización. El asesinato de otra personalidad pública, el general Landazábal, exministro de Defensa podría estar ligado al mismo plan. Algunos asesinatos recientes, al igual que las campañas desatadas contra figuras que han participado en los procesos de paz, podrían testimoniar la persistencia de esa corriente, una corriente que no está dispuesta a cortar los vínculos con Castaño y los suyos.

En todo caso, y tras la crisis del 26 de mayo, el gobierno no puede darse el lujo de desconocer, las opiniones de las fuerzas armadas acerca de cómo evolucionan las conversaciones de paz.

En teoría, al estar afectado por el aislamiento político, Pastrana hubiese podido buscar el diálogo con la «sociedad civil». Su deseo inicial de no tener interferencia en el manejo de las conversaciones, la recurrente desconfianza de la «sociedad civil» hacia todo lo que provenga del Estado, han reducido ese intento a muy poca cosa. Con todo y eso, el conjunto de organizaciones que se engloban bajo esa denominación, es en verdad representativo de nuevas tendencias en la opinión pública.

Una millar de organizaciones de toda especie, ONG, sindicatos universidades, minorías étnicas, asociaciones barriales, comités de abogados defensores, federaciones patronales, etc. forman esa «sociedad civil». Diversas redes agrupan a esas entidades. En principio la Iglesia ha desempeñado un papel muy importante, de manera directa o a través de organizaciones creadas por ella. A medida que la «sociedad civil» se amplía, se manifiestan nuevas corrientes. Las sensibilidades son heterogéneas. Algunas de las organizaciones están vinculadas a la defensa de intereses sociales y económicos muy diversos, en tanto que otras responden de una manera explícita a orientaciones de izquierda. Varias más reivindican para sí una cierta «neutralidad» frente al conflicto, otras denotan un esfuerzo pedagógico por aclimatar una «cultura de la paz», y una minoría está impregnada, todavía, de un espíritu «vanguardista». Mientras que hay algunas que consideran que las transformaciones sociales han de ser previas a cualquier acuerdo, las hay también que claman por que ante todo se ponga fin a las hostilidades. Hay comités organizados que buscan participar de un modo más directo en las negociaciones (tal es el caso de la llamada Comisión nacional de conciliación en la que el episcopado está ampliamente representado) en tanto que otras están interesadas principalmente en crear nuevos modos de participación ciudadana.

La «sociedad civil» aparece a menudo como una especie de «contrasociedad política». Pues lo que la unifica, a despecho de su diversidad, no es tan solo su distancia respecto de los partidos políticos sino su desconfianza respecto del Estado. La iglesia y las corrientes de izquierda comparten por lo general la utopía de una sociedad, que regenerándose, triunfará al fin sobre la violencia e inventará una nueva forma de organización política. Pero dicha «sociedad civil» es una especie de contrasociedad política en otro sentido: la multiplicidad de tendencias termina por reintroducir la política en el interior de ésta nebulosa, con todos sus conflictos y con todos sus compromisos. El deseo de mantener un consenso a toda costa, aconseja cautela y prudencia respecto de muchos temas, y la denuncia acerca de los excesos de la guerrilla, por ejemplo, elude cualquier referencia a sus vínculos con la economía de la droga. La política de los acomodamientos<sup>18</sup> puede con el tiempo debilitar la nitidez de las posturas éticas, y reducir la transparencia del espacio público de las que tales organizaciones son el soporte.

Con todo y eso tales organizaciones vienen siendo el vector central de una opinión pública en favor de la paz. En todo caso el tema de la sociedad civil es nuevo en Colombia, en donde la sociedad ha estado siempre subordinada a las redes políticas, cuando no sometida a las redes armadas. Contribuyen así mismo, en los sectores urbanos al menos, a favorecer, mediante formas de movilización inéditas, un sentimiento de identificación con una sociedad civil que se libere de esa doble dependencia. En los últimos meses se ha visto cómo han originado amplias manifestaciones para protestar contra secuestros y desapariciones. En las grandes ciudades los manifestantes se contaron por centenares de miles. En las ciudades medianas y pequeñas, en muchos casos asediadas, tales manifestaciones suponen un coraje digno de mención. Esto quiere decir que la «sociedad civil organizada» en ocasiones logra movilizar una sociedad civil más amplia, susceptible de hacer prevalecer su propia representación de las cosas.

Si dichas organizaciones o participan directamente en las conversaciones, no por ello dejan de ejercer una influencia muy directa. Una influencia que por cierto puede aumentar a medida que la situación se deteriora, a condición que la intimidación no interfiera la expresión de lo que subsiste como opinión pública. Queda por saber si el Estado y la sociedad civil pueden continuar ignorándose a medida que la guerra se intensifica.

---

<sup>18</sup>Fue típica al respecto, la firma por parte de muchos de los representantes de la sociedad civil, del documento de Maguncia en el que la guerrilla anunciaba la selectividad de los secuestros. Muchos críticos vieron esa firma como una demostración de la tendencia a la acomodación.



## *Entre la guerra civil y la violencia caótica* *Agravamiento y degradación del conflicto armado*

Pues lejos de atenuarse el conflicto armado se ha ido identificando. Se endurece en las regiones en que ya existía y se extiende a otras regiones. En razón de los medios utilizados, registra un proceso de degradación. Hace sentir sus efectos, incluso en los espacios institucionales que se habían mantenido tradicionalmente al margen.

Los grandes operativos de las FARC no son más que el aspecto más visible de la guerra. Y por cierto que no han cesado. Después de los ataques del 98, que mencionábamos antes, se han sucedido varios de no menor amplitud. El 1° de noviembre de 1998 las FARC se apoderan por algunas horas de Mitú, capital departamental en la región amazónica colombiana. Ese mismo mes intentan en vano atacar a Florencia, capital del Caquetá. Se demuestra que la desmilitarización de una zona estratégicamente situada confiere a la guerrilla una mayor movilidad y la ha garantizado una retaguardia muy segura, que le hace posible enviar destacamentos muy experimentados a otros teatros de combate. La novedad es que en los últimos ataques la reacción de las fuerzas armadas ha sido más oportuna, y le ha infringido a la guerrilla numerosas pérdidas en hombres, sobre todo en la ofensiva de julio de 1999. Los medios de seguimiento y espionaje electrónico, proporcionados por los Estados Unidos les confieren una posibilidad de intervención más efectiva. Sin embargo sería prematuro deducir que se haya producido una alteración significativa de la relación de fuerzas. La guerrilla ha mostrado flexibilidad para adaptar sus tácticas a las nuevas condiciones, y el fracaso de alguna de sus operaciones no ha logrado contrarrestar su progresiva expansión territorial, o impedir sus acciones contra ciudades secundarias. Así mismo han mostrado disposición de tomar el control de nuevos ejes estratégicos. Han multiplicado por ejemplo sus acciones en la zona cafetera, el Valle del Cauca y el Cauca con el fin de asegurar una ruta hacia el Pacífico que le permita resarcirse de la pérdida de aquel corredor que pasa por Urabá.

Pero a nuestro juicio las confrontaciones más significativas son las que enfrentan a la guerrilla y a los paramilitares. Las FARC no han renunciado a recuperar al menos una parte de Urabá. Concentraron en sus cercanías cerca de un millar de sus combatientes, y se han registrados combates directos, en particular en el nudo de Paramillo, macizo montañoso, que domina el acceso a Córdoba y el sur de Urabá. En Diciembre de 1998 la guerrilla logra apoderarse del campamento, de Carlos Castaño, quien a duras penas logra escapar.

El conflicto se extiende al Chocó, una región limítrofe, hasta hace poco relativamente pacífica. En el Magdalena medio y el noroeste de Antioquia. Los enfrentamientos son continuos e intensos. Durante tres meses los paramilitares desarrollan acciones contra los últimos bastiones del ELN en la zona petrolífera del Tibú, con más de doscientos muertos. Nuevos grupos paramilitares surgen por doquier para coartar los avances de la guerrilla. En el Valle del Cauca, a una hora apenas de Cali, se cometen masacres que obligan a la fuga de los pobladores. La guerra se extiende geográficamente.

Y a la vez muestra nuevos signos de crueldad. El recurso de los paramilitares a las masacres, destinadas a sembrar el terror en la población, ciertamente no es nuevo. No es procedimiento ocasional, sino una estrategia deliberada, que prosigue con intensidad. Si las guerrillas lo practican con menor frecuencia, no por ello han retrocedido ante otros métodos de intimidación. Al atacar poblaciones no vacilan en exponer a la población civil, y a llevar a cabo considerables destrucciones de edificaciones e infraestructura civil; en algunos casos (como en San Francisco y en Nariño; en Antioquia) se echa de ver un propósito de retaliación, de «castigar» a sus habitantes por presuntas simpatías hacia el ejército o con los paramilitares. Por su parte el ELN provocó la muerte de más de 70 personas en un atentado en Machuca, en un atentado al oleoducto que produjo un incendio arrasador.<sup>19</sup> Lo ocurrido con posterioridad a éste hecho es revelador del actual entramado de las violencias colombianas: un combatiente del ELN cuya familia pereció en el incendio desertó y pasándose a los paramilitares les entregó los nombres de los colaboradores de la guerrilla, lo que produjo terribles represalias. Que las FARC no vacilan ante el asesinato de «sospechosos» lo demostró matando a sangre fría a tres norteamericanos que habían venido en defensa de los indígenas U-was en su lucha contra las multinacionales del petróleo. El seguimiento de sus comunicaciones demostró de un acto impremeditado o de un error: la orden vino de lo alto, y quedó claro que procedía del hermano del Mono Jojoy, comandante del frente regional. El caso demostró además que las FARC ocasionalmente sucumben a una especie de autismo, y olvidan el contexto internacional, la enérgica reacción de los Estados Unidos se encargó de recordárselo.

---

<sup>19</sup> Durante varias semanas se empecinó en atribuir la responsabilidad al ejército, antes de reconocer por fin la suya. Más grave aún es que varias ONG defensoras de los derechos humanos vacilaron en condenar el atentado.

El cuadro sería incompleto si no se hiciera mención de lo rutinario de los secuestros, práctica en la que la guerrilla también ha ido especializándose; a los secuestros selectivos, se le añaden ahora los secuestros efectuados al azar en retenes, en las carreteras. Una práctica que contribuye a hacer más peligrosos los desplazamientos, y generaliza el clima de guerra. Ilustra sobre todo la degradación que ha adquirido la confrontación. Nunca antes los secuestros habían sido tan numerosos como en el año 1999. Un ambiente de intimidación se ha ido trasladando a espacios e instituciones en los cuales se manifiestan todavía los debates de opinión y la reflexión crítica. Si las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos desde hace tiempo han sido el blanco de los paramilitares, las amenazas se han intensificado y muchas de ellas han tenido que cerrar sus puertas. El propio gobierno obligó a la delegada de las Naciones Unidas a salir de Colombia. Los militantes de la “sociedad civil” que se han esforzado en mantener un diálogo con las guerrillas se ven así notificados. El 13 de agosto de 1999 el asesinato de Jaime Garzón produce un impacto y una conmoción pública comparable solamente al asesinato de Luis Carlos Galán, diez años atrás; al eliminar al humorista más popular de Colombia, se elimina también a quien contra viento y marea buscó establecer un puente entre las partes en conflicto. La intimidación llega también a las universidades. El ejemplo de la mas grande universidad de la ciudad de Medellín, sometida a la ley del silencio y a la intimidación, bien podría extenderse a otras universidades. El asesinato de Jesús Antonio Bejarano, exconsejero de paz y profesor de la Universidad Nacional, va en la misma dirección. Todo demuestra que un sector el de los paramilitares y los militares extremistas, tiene una parte determinante en la difusión del terror. Pero de su parte la guerrilla hace lo propio para conducir al país a un proceso de polarización.

### *Las otras dimensiones de la violencia*

Sería una simplificación sin embargo, adscribir todos los fenómenos de violencia a la confrontación de estos dos campos. Muchas otras dimensiones interfieren, y contribuyen a la degradación y a un contexto, que por fuera de los principales protagonistas armados, gravita en los actuales conatos de negociación.

A ese respecto, debemos volver sobre la economía de la droga, en la medida en que se incrementa. Influye a su vez en todos los datos del conflicto: Las FARC son de lejos el actor que más se beneficia de ella. Si de cuando en cuando ensayan una cándida negación de las acusaciones según las cuales participan en las redes de exportación, y de procesamiento, de lo que no hay duda es de que controlan las zonas de cultivo. Como tales zonas albergan así mismo la mayor parte de los

laboratorios lo cándido sería creer que no se lucran de su funcionamiento. Al comprometerse en el diálogo, el gobierno considera que llegado el momento, podría comprometerlas en un vasto programa de sustitución de cultivos, financiados con la ayuda de la comunidad internacional. Opositores ardientes y con muy buenos argumentos de los programas de fumigación adelantados por la presión de los Estados Unidos, las FARC no se niegan a esa perspectiva. Incluso han propuesto que la experiencia piloto se desarrolle bajo su control en el municipio de Cartagena del Chairá.

Pero las FARC no han dado signos tangibles de buena voluntad. Otros indicios, señalan que la producción ha aumentado considerablemente en la propia zona de distensión. No se puede excluir que mostrándose dispuesto a erradicar los cultivos en Cartagena del Chairá, busquen ante todo atraer la atención internacional y finalmente integrar otros municipio a su “soberanía”. Los Estados Unidos habían apoyado en principio la propuesta, pero los datos que mostraban el incremento de la superficie de cultivo, hizo modificar su actitud. El papel de las guerrillas en la economía de la droga obliga a matizar la visión de un conflicto en tan solo dos campos. Los narcotraficantes de hecho constituyen un tercero., que oscila entre los dos primeros, cooperando ocasionalmente con las guerrillas, o con los paramilitares según la ocasión y el lugar y, en suma haciendo del pragmatismo su doctrina. Existen a la vez agrupaciones guerrilleras de las que es muy difícil precisar si son guerrillas o redes de narcotráfico: Eses el caso de la organización Jaime Bateman Cayón, integrada por unas 300 personas, y que durante mucho tiempo actuó a la sombra del cartel de Cali.

Como puede pensarse, la participación de la guerrilla, en las actividades relacionadas con la droga, no es extraña a la degradación de ciertas prácticas de los combatientes. Entre un mercado ilegal y los demás mercados ilegales, el de la droga, el de la extorsión y el de los secuestros la semejanza es muy grande. A todos esos mercados la guerrilla se encuentra asociada y en competencia con otros grupos. Incluidas bandas muy especializadas de la delincuencia organizada.

Muchos de los secuestros son subcontratados, con estos grupos, y es también de ocurrencia frecuente que tales grupos actúen por su propia iniciativa y “revendan” sus víctimas a las guerrillas.

En las ciudades también intervienen otros actores armados. Las milicias y las bandas juveniles que reclutan ante todo en las áreas periféricas no han cesado de multiplicarse, pero a la vez de sufrir metamorfosis. En algunos casos aspiran al proteger “sus” barrios contra las amenazas exteriores, en otros casos albergan ambiciones políticas. En varias ocasiones se han aliado, sucesiva o simultáneamente,

con la guerrilla, con los narcotraficantes y con la delincuencia común. Las autoridades locales han ensayado recientemente reconstruir un ambiente de convivencia, mediante estímulos económicos y pactos, que sin embargo resultan muy frágiles. Las guerrillas se han propuesto cooptarlas recientemente pero muchas de ellas se han pasado ya a los paramilitares. Violencia desorganizada, delincuencia, rivalidades territoriales y polarización militar, se entremezclan, sin que se llegue a producir una fusión.

Nada de lo anterior atenúa sin embargo el carácter político de la confrontación principal. Lo que queremos significar es que no se la puede aislar de un contexto que por momentos tiende a desbordarla. Dicha confrontación principal alimenta a otras modalidades de violencia que a su turno influyen sobre ella. Pero lo cierto es que la desorganización del tejido social que resulta de todas estas interacciones y de su reciprocidad, hace más difícil la búsqueda de una solución política.

### *Una guerra contra la sociedad.*

Hay que decir algo más: no se puede hablar de guerra civil, pues la mayoría de la población no se identifica en modo alguno, ni con uno ni con otro protagonista. La sociedad ha sido tomada como rehén.

La confrontación armada no ha provocado el colapso del aparato estatal, como en otros países, mal que bien el Estado colombiano continúa funcionando. No se nutre de diferencias, inventadas o no, trátense de diferencias culturales, regionales, políticas o, menos aún, étnicas. No suscita un imaginario, ni siquiera aquel que acompaña las divisiones “amigo-enemigo”, ni tampoco aquellos que prometen un mañana luminoso. El descrédito de las guerrillas es patente. Siendo profundo en las clases medias urbanas, es perceptible también en los sectores populares. Una encuesta reciente hecha entre los jóvenes de Ciudad Bolívar, muestra que tienen una percepción más negativa de la guerrilla que de otras organizaciones e instituciones.

La confrontación armada no corresponde a un antagonismo social definido. Es verdad que los paramilitares se benefician de los sectores económicamente poderosos, y que esto implica una disimetría con las guerrillas. Pero ellos mismos han mostrado su capacidad de obtener su apoyos en otros sectores sociales. Contrariamente a lo que esperaba la guerrilla, los devastadores efectos de la crisis económica, no han conducido a las clases populares a lanzarse a protestas que confluyan con la acción armada. Los sindicatos del sector público, los únicos que disponen de una cierta capacidad de movilización, denuncian todos los días los males del neoliberalismo, pero a la vez se esfuerzan por evitar el riesgo de la

instrumentalización de sus movimientos por parte de la guerrilla. A los ojos de muchos observadores la huelga general del 31 de agosto de 1999 podía haber ofrecido a los grupos armados la oportunidad de provocar violentos enfrentamientos. Salvo unos pocos incidentes, nada de eso ocurrió: la actividad del país se detuvo, pero los colombianos se quedaron en sus casas. La mayoría de la Confederación de Trabajadores (CUT) está orientada a la izquierda. Pero para evitar pasos en falso, no quisieron ocupar el sitio que se les reservaba en el seno de la comisión de la “sociedad civil” que debería hacer un seguimiento de las negociaciones con las FARC.<sup>20</sup>

En lo esencial, la conflictividad social no se da a través de los actores sociales, se manifiesta en la violencia cotidiana y desorganiza la vida urbana, pero es una violencia sobre la que los actores armados tienen poca incidencia.

La confrontación armada es eminentemente prosaica. No solo en razón de sus vínculos con las actividades económicas que la sustentan; sino ante todo porque busca solamente engendrar la sumisión de los habitantes a las redes de poder a través de las cuales se manifiesta localmente.

Mientras quien se enseñoree de un territorio mantenga un dominio estable, su presencia determina una actitud que es una adaptación del viejo adagio del período de las guerras religiosas en Europa : *cujus regio ejus religio*. La red armada en cuestión encarna al rey o amo de la región y la sumisión equivale a la religión. La adaptación a las reglas establecidas por dicha red no ha implicado en principio grandes dificultades. Incluso ofrece ventajas concretas en regiones como las regiones de cultivos ilícitos, en las que la organización armada se encarga de defender los intereses de sus habitantes. Por otra parte las fricciones que suscitan los eventuales abusos de la organización, se mantienen dentro de ciertos límites.

Con todo y eso el giro que ha tomado la confrontación en el período más reciente tiende a modificar esos datos. Los pobladores de los territorios en disputa han comprobado que los amos de hoy, pueden no serlo mañana; peor aún que en ocasiones pueden encontrarse cara a cara con el mismo combatiente, con algunos cambios en su indumentaria, pero perteneciendo a una organización completamente distinta, que por lo tanto no están al abrigo de incursiones, y menos aún de la vigilancia del adversario de ese poder territorial de hoy. Para hacer más difíciles las cosas, en las zonas en disputa las fronteras entre uno y otro dominio son muy cambiantes, y eso incrementa el peligro de muerte. Todos ignoran cuáles actos se consideran como colaboración: no han faltado los casos en que una persona ha sido

---

<sup>20</sup> Justificó su decisión afirmando que no se reconocía ni en el gobierno ni en las guerrillas.

ejecutada por haber contribuido al aprovisionamiento del enemigo, pues éste le robó una gallina.

La territorialización es el objetivo, la ambición de los protagonistas armados. La desterritorialización es en cambio la suerte de una gran parte de la población. El espacio local pierde en efecto su materialidad. Ya sólo está definido por la convergencia de las diversas e invisibles líneas que marcan la influencia de los poderes armados. Las relaciones sociales se disuelven pues la desconfianza se instaaura aun con las personas cercanas ya que pueden tener un pariente en una de las organizaciones. Ya no se trata tan solo de que exista una “ley del silencio”: es que en general nadie se atreve a hablar. El lugar en donde ésto ocurre se transforma en un “no-lugar”. Los desplazamientos masivos, son apenas la manifestación concreta de ésta situación. Por si fuera poco, en su punto de llegada, no deja de ser frecuente que los desplazados se encuentren a presiones crecientes de otros grupos armados. Para muchos de ellos ya no hay espacio libre. En algunos lugares la población ha querido protegerse proclamando su “neutralidad”, en otros la Iglesia ha establecido “comunidades de paz” dedicadas a acoger a los desplazados: en ambos casos los actores armados, y en especial los paramilitares, no dejan de acechar esos espacios intersticiales.

Ese sector de la población está verdaderamente sumergida en un clima de guerra. Pero solo excepcionalmente se identifica con los que propone uno u otro actor armado. Los protagonistas armados y sus redes actúan en función de sus propios intereses. Para los colombianos en general, ningún marco global del conflicto es perceptible. Cotidianamente se ven afectados por la experiencia del terror, pero de un terror que no está vinculado a un conflicto que tenga sentido para la mayoría de ellos: tienen la posibilidad de “pedir la palabra” ni de la “adhesión”. Solo les queda la “defección”, y de hecho más de 1’500.000 desplazados son la prueba de ello: pero también los centenares de miles, que empujados por la crisis económica, abandonan su país.

La guerra prosigue, pero no es una guerra civil, es una guerra contra la sociedad.

## *Conclusión*

Hemos hablado antes de que estamos ante un momento decisivo. Tal momento bien podría consistir en la internacionalización de la cuestión colombiana.

Derechos humanos, droga, gobernabilidad., solvencia económica, emigración clandestina medio ambiente, figuran en primera línea de los desafíos que pretende

afrontar el nuevo orden internacional. Y en cada uno de esos grandes temas de la agenda internacional Colombia afronta un problema serio.

Por ello la situación colombiana se ha transformado en un problema regional. De agravarse, se convertiría en una fuente de inestabilidad para los países vecinos. Ecuador, al borde de la bancarrota, y Perú, están involucrados en la medida en que sus territorios son empleados por las rutas clandestinas del tráfico de armas, y por la ostensible presencia de la guerrilla en sus zonas fronterizas. En cuanto a Venezuela, Chávez se ha visto involucrado de varias maneras. La implantación de la guerrilla en las proximidades de la frontera es fuente de constantes incidentes, y Chávez no ha dejado de declarar que el conflicto colombiano es una amenaza para su país. Al mismo tiempo, el presidente venezolano y las FARC tienen en común la reivindicación del pasado bolivariano y no ocultan un cierto grado de atracción recíproca. Uno u otro motivo han llevado a Chávez a anunciar su intención de negociar con la guerrilla colombiana con o sin el aval del gobierno colombiano, lo que podría sacar finalmente a la guerrilla de su aislamiento internacional. El desorden colombiano adquiere entonces una dimensión regional.

Por su parte los Estados Unidos ya hace un tiempo han sometido a Colombia a una vigilancia especial. Aunque hayan dado en principio su aval a la gestión de paz de Pastrana. En diciembre de 1998 una delegación del Departamento de Estado tomó contacto en Costa Rica con representantes de la guerrilla. Poco después el asesinato de los tres indigenistas puso fin a ese ensayo, y endureció la posición norteamericana. La degradación del conflicto colombiano les ha llevado a repensar su política. Hasta aquí había estado centrada en la cuestión de la droga. El creciente poder militar de las guerrillas ha puesto en cuestión dicha prioridad. Se ven confrontados entonces al dilema del huevo y la gallina. Puesto que la coca y la guerrilla se engendran una a otra, ¿se debe atacar la cuestión de la droga para debilitar a la guerrilla o atacar a la guerrilla para “resolver” la cuestión de la droga?

Todo indica que se inclinan de por la segunda de las opciones del dilema. Tras haberse negado por muchos años a prestar ayuda a las fuerzas armadas. Acaban de asegurar la formación de una unidad de élite, destinada en principio a luchar contra el tráfico de droga, pero preparada para enfrentar la guerrilla.

De hecho Colombia es actualmente el país que, después de Israel y de Egipto, recibe mayor cantidad de ayuda norteamericana. Y los Estados Unidos se preparan para incrementarlas en cantidades considerables. Se multiplican las gestiones para que países como Argentina, Perú, y otros, presten su concurso, o por lo menos admitan la posibilidad y la necesidad de hacerlo en un futuro próximo. Mientras tanto en los propios Estados Unidos, en los que los diversos organismos que tienen que ver



con Colombia se muestran divididos. Parecen predominar las dudas acerca del curso de las acciones, y en todo caso tratan de evitar verse comprometidos más allá de un cierto margen. Ni se considera teóricamente una intervención directa. Pero no dejan de constatar sobre el terreno el déficit de gobierno y lo confuso de la situación.

Sus objetivos no son en todo caso poner a las fuerzas armadas, unas fuerzas armadas en las que tienen una confianza muy limitada, en situación de vencer a las guerrillas. Tal vez su objetivo más importante en la actual coyuntura sea contribuir a la modificación de la correlación de fuerzas de modo que las guerrillas se convenzan de la necesidad de una negociación en serio. En un panorama así de confuso, el peligro es que una ayuda militar masiva no contribuya unilateralmente a intensificar el conflicto, a darle solamente un giro de tuerca.

Muchos colombianos dan cuenta de la medida de su desesperación al expresar sus deseos de una “intervención norteamericana”. En todo caso una ayuda militar mal orientada puede inclinar la balanza del lado de la polarización, a la que no se ha llegado todavía.

Lo que sí es cierto es que el gobierno colombiano no puede retomar el control de la situación sin el concurso de la comunidad internacional. La movilización de la sociedad civil está ahí para demostrar que la evolución hacia lo peor no es inevitable. Europa y los países latinoamericanos deben a su turno hacer manifiesta su presencia, y contrapesar la ingerencia norteamericana, contribuyendo a que la negociación se lleve a cabo sobre bases distintas..

## *Colombia: Una paz esquiva*

*Daniel Pécaut*

### *Resumen*

En Colombia, el problema de la paz estuvo en el centro del debate presidencial de 1998. Un año más tarde, al terminar las conversaciones preliminares, las negociaciones propiamente dichas no habían comenzado. De hecho, desde 1995 el problema de la confrontación armada, ha relegado a un plano secundario al problema del narcotráfico, actividad que está en manos ahora de una multitud de «cartelitos». Mientras que el ejército parece desbordado por la magnitud de las operaciones guerrilleras, y el gobierno parece aislarse, el conflicto tiende a desinstitucionalizarse y a oponer a dos actores ilegales: guerrilla y paramilitares. Entra tanto la situación económica da signos de deterioro, y el «costo» de la violencia, que hace poco comienza a tomarse en cuenta, ha conducido a muchos de los actores sociales a aceptar un principio de negociación. Pero la suerte de las conversaciones con las FARC parece por ahora muy incierta, mientras que las que se sostienen con el ELN sufren las consecuencias de las dificultades internas que demuestra esta organización. En tanto que el número de víctimas aumenta, la población en general enfrenta una violencia cotidiana y desestructurada, y a todas luces una ayuda internacional es indispensable para retomar el camino de la negociación.

### *Abstract*

Peace in Colombia was at the core of presidential campaign in 1998. A year later, at the end of preliminary talks, negotiations have not really begun. In fact, since, 1995, the problem of armed conflict has supplanted the issue of the drug trade, an activity which is now in the hands of a host of small cartels. Whereas the army seems often overrun by large-scale guerrilla operations, and the government seems isolated, the conflict is moving away from an institutionalised context towards a struggle between two illegal players: the guerrillas and paramilitary groups. The economic situation is worsening and the «cost» of violence, which has only recently been taken into account, has prompted civil leaders to accept the principle of negotiation. But the future of this negotiation seems highly uncertain. Since the number of killings and kidnappings is increasing and sporadic violence is an everyday occurrence, the help of the international community seems needed to relaunch the peace process.